

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la parte denunciada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primera instancia que acogió la denuncia y condenó a don Jean Pierre Lepe Robles y a don César Leal Hernández solidariamente al pago de 330,064 unidades tributarias mensuales y, adicionalmente a este último en su calidad de patrón de la nave, al pago de 15 unidades tributarias mensuales, más la suspensión del permiso respectivo.

Segundo: Que la parte recurrente denuncia vulnerados los artículos 44 y 1698 del Código Civil en relación con lo dispuesto en los artículos 3 c), 48 letra a), 110 letra f) y 112, 125 N°1 y 4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Asegura que es un hecho no controvertido que la Resolución Exenta N°4, de 8 enero de 2022, que suspendió las actividades extractivas sobre el recurso jurel, fue notificada el 9 de enero de 2022, precisando que dicho correo electrónico fue visto alrededor de las 13:00 horas, posterior a la fecha en que regía la suspensión de las actividades extractivas. En este escenario, asegura que la judicatura de fondo, sin fundamento alguno desestimó la verosimilitud de la alegación de falta de conocimiento de la suspensión decretada, lo que constituye una contravención a las reglas de la sana crítica.

Concluye que, como consecuencia de lo anterior, debió rechazarse la denuncia por cuanto es deber del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informar oportunamente tanto del inicio como del cierre de las respectivas temporadas, lo que en el caso no ocurrió, irrespetando con ello, además, el artículo 3° de la Ley 18.575 que consagra el principio de publicidad de los actos administrativos.

Tercero: Que en la sentencia se establecieron los siguientes hechos:

1. La embarcación "Pedro L" realizó operación de pesca en dos oportunidades en la zona estadística 165, con resultado de captura, durante el viaje de pesca efectuado entre el 9 y 10 de enero de 2022, o sea, con posterioridad a la fecha y hora fijada para la suspensión de las actividades extractivas del recurso jurel.
2. Con fecha 8 de enero de 2022, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comunicó a los armadores artesanales mediante Resolución Exenta



N°00004, publicada en el sitio web institucional, que debían suspenderse las actividades extractivas sobre el recurso jurel por haberse completado la cuota asignada para el año, a partir de las 11:00 hora local, del 9 de enero de 2022.

Sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo advirtió que *“(...) la defensa asila su petición en que la notificación de la resolución que dispuso el cese de captura por haberse completado la cuota de recurso asignada habría sido inoportuna, lo que habría imposibilitado al armador tomar conocimiento de ella y, a su vez, transmitir la información oportunamente a la embarcación invocando al tenor de ello, la ausencia de culpabilidad.”* Enseguida, determinó que lo anterior *“(...) resulta inverosímil para esta judicatura porque estaríamos frente a embarcaciones que permanecerían en alta mar totalmente incomunicadas.”*

No obstante lo anterior, concluyó que *“Lo cierto es que el Servicio dispuso el cese de captura por agotamiento de la cuota establecida, dio el aviso correspondiente, y por la vía que el propio armador estableció como forma de comunicación, siendo responsabilidad de éste tomar las medidas administrativas pertinentes, eficaces y oportunas, para cumplir lo ordenado.”*

Cuarto: Que, de acuerdo con los antecedentes relacionados, la parte recurrente pretende eximirse de responsabilidad sobre la base del desconocimiento de la medida de suspensión de las actividades extractivas, cuya notificación fue establecida como hecho probado. De esta manera, la defensa consistente en que la nave zarpó antes de la hora en que comenzaba a regir la suspensión y desconociéndola, carece de asidero en los hechos que se tuvieron por asentados. Lo anterior pues, si bien se invocan infringidas normas reguladoras de la prueba, el recurso se limita a cuestionar la ponderación de aquella y su suficiencia para acreditar la ausencia de culpabilidad, sin precisar contravención alguna a los principios que integran el sistema valorativo de la sana crítica.

En efecto, el cuestionamiento de la valoración efectuada por la judicatura acerca de la verosimilitud de la falta de conocimiento de la suspensión decretada, carece de influencia en lo dispositivo del fallo, desde que, con independencia de la efectividad de este hecho, lo cierto es que la denuncia fue acogida fundado en que es responsabilidad de la denunciada tomar las medidas administrativas pertinentes, eficaces y oportunas para cumplir con lo ordenado.



Quinto: Que, conforme se ha venido razonando, el ejercicio recursivo carece de contenido que permita colegir algún error en la valoración de la prueba y en la consecuente aplicación de las normas sustantivas, que tengan influencia en lo dispositivo del fallo, razones que llevan a desestimarlos por manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y normas citadas, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia de trece de marzo de dos mil veinticinco.

Regístrese y devuélvase.

N°11.379-2025

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., María Soledad Melo L., Jessica González T., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. firma la ministra señora Melo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.



En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

